

Santiago, tres de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

El Quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de veintiocho de septiembre del presente año, procedió a condenar al acusado **CLAUDIO ESTEBAN CALDERON SILVA**, en calidad de autor de dos delitos de robo con intimidación en grado de consumados, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 432 y 436, ambos del Código Penal, acaecidos en ese territorio jurisdiccional (Maipú), el 28 de agosto de 2019, debiendo sufrir la pena de **DIEZ AÑOS y UN DÍA** de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares, mientras dure la condena.

Al no reunir el sentenciado ninguno de los requisitos la Ley N° 18.216, deberá cumplir de forma efectiva la pena impuesta sirviéndole de abono los tiempos que en el mismo fallo se precisan.

Asimismo, se le eximió del pago de las costas, por lo señalado en el considerando decimocuarto de la sentencia que se revisa.

La Defensora Penal Pública, Vivian Hinostroza Ojeda dedujo en representación del único sentenciado de autos un recurso de nulidad, invocando como exclusiva causal, la del artículo 374 letra e), en relación con el artículo 342 letra c), ambos del Código Procesal Penal, resolviéndose admitirlo a tramitación, fijándose la audiencia del día martes 23 de noviembre del presente año para llevar a cabo su conocimiento en esta Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que se cumplió conforme al mérito del acta que se acompaña, la que da debida cuenta de su realización, con la concurrencia y alegatos de los abogados que en el registro de audio se consignan, actuando en representación del Ministerio Público y de la defensa, siendo que, luego de la vista del recurso, se citó en la misma a los intervinientes a la lectura del fallo ordenada para el día de hoy.

Finalmente, debe dejarse debida constancia que al momento de llevarse a cabo la audiencia para el conocimiento del recurso, no se ofreció prueba.

CONSIDERANDO:



Primero: Que, la Defensoría Penal Pública actuando por el imputado invoca la causal del artículo **374 letra e) en relación al artículo 342 letra c), ambos del Código Procesal Penal**, esto es, cuando en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el segundo artículo citado, es decir, la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieran por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297 de igual texto.

Segundo: Que, a dicho respecto, señala el libelo anulatorio, luego de reproducir los hechos establecidos por el tribunal en su motivo SEPTIMO y la calificación de los mismos en el OCTAVO, estima que se vulneran los principios de la lógica y las máximas de la experiencia que integran la sana crítica, específicamente respecto de los primeros, el principio de razón suficiente, en razón de un procedimiento policial que no logra determinar en juicio cómo es que llega a establecer que su representado era la persona que había cometido ambos hechos, y esto deriva en que la prueba vertida en el juicio oral sería insuficiente para efectos de atribuir participación a mi representado.

Tercero: Que, se destaca la defensa que CALDERÓN SILVA fue detenido en virtud de un procedimiento policial del cual no tienen conocimiento ni explicación en juicio ni en el fallo que surge del tribunal Oral, que les permita comprender como es que se logra determinar durante esta investigación que el único imputado sea quien haya incurrido en las conductas que se adjudican, particularmente dada las características iniciales dadas por las víctimas a la policía que no aportaron rasgos determinantes y diferenciadores, máxime si fue detenido producto de una orden judicial a raíz de que llevadas a cabo diligencias de investigación se determinó que era el, siendo que los ofendidos refieren haber visto al sujeto que las intimida, pero esta visualización solo duró un segundo a un segundo y medio, sumada la dinámica apreciada en el video y la descripción fáctica que ambas dan al tribunal en torno a haber sido atacadas ambas por la espalda, en donde no solo existe tal ataque por la espalda sino que también la defensa de las pertenencias y la exhibición de un arma.



Luego reproduce los dichos de cada una, concluyendo en señalar que ambas víctimas refieren rasgos de un sujeto que uno debió haber apreciado también en el juicio, sin embargo, esto también se hizo presente por la defensa que no se daba y sin embargo nada de eso dijo el tribunal, porque efectivamente la persona que fue llevada a juicio no tiene ni el lunar en la cara ni la mancha en la frente que fueron referidos como rasgos que definían a este sujeto.

Por ello es que el tribunal tampoco confirma que la persona incluso reconocida además tenga estos supuestos rasgos distintivos como una mancha en la cara en la frente o un lunar en la cara, ya que no se aprecian en la persona del imputado durante todo el tiempo que uno lo ve dado que el imputado durante el tiempo que se desarrolla el juicio estaba sin mascarilla y no se le aprecian dichos rasgos.

Cuarto: Que, por consiguiente y teniendo en cuenta lo relatado precedentemente, sostiene que se vulnera el principio de razón suficiente que informa la valoración de la prueba en sede penal, el cual establece que “la ley exige certeza sobre los extremos fácticos de los que se hace desprender las consecuencias jurídicas emanadas de la sentencia, se requiere que la prueba en que se basa la decisión sólo pueda dar fundamento a esas conclusiones y no a otras”, concluyendo el fallo la participación del acusado en base a un razonamiento insuficiente e incompleto, siendo que no pudo la víctima tener certeza acerca de la persona del ofensor y no existen otros elementos que permitieran corroborar la identidad de éste, es que existe una duda razonable en lo que concierne la participación en calidad de autor de su representado no alcanzando el estándar necesario de convicción para condenar a un individuo y destruir la presunción de inocencia que ampara a toda persona parte de un Estado de Derecho.

Quinto: Que, tampoco ayudan al esclarecimiento de los hechos y la participación, el reconocimiento de la víctima del hecho 1, durante la investigación que contenían dos carpetas con fotografías de hombres, solo caras, no recuerda si había nombres, había gente joven, adulta, eran de distinta edad, unos blancos y otros morenos, había con barbas, con lentes y



sin lentes. Reitera que describió al sujeto al momento de hablar con carabineros el día de los hechos y después al ir a la comisaría.

Sin embargo, para el tribunal esto resultó trascendente.

Lo anterior se repite también en el testimonio de la víctima del hecho 2, quien a propósito de este mismo tema refiere que el sujeto “tiene un lunar en la mejilla izquierda y tiene una marca en la frente al medio, como una cicatriz, es trigueño, de contextura gruesa, andaba con un cuchillo grande tipo carnicero grueso”.

Estas referencias no fueron las utilizadas en los set fotográficos confeccionados durante la investigación a las víctimas, puesto que una de ellas nos refiere las diferencias entre los hombres que integran esos set y aun así el tribunal lo estima determinante dentro de estas labores, por lo que el tribunal valora un procedimiento policial que no sabe cómo es que se va desarrollando en el tiempo, como es que incluyeron al imputado al elaborar estos set, sobre todo si los rasgos dados por las víctimas no fueron considerados en su confección.

A pesar de lo señalado, el tribunal no dio razones suficientes para darle a esos testimonios el valor exigido para condenar.

Sexto: Que, en lo conclusivo, al prescindir el fallo del estándar mínimo establecido en el artículo 297 del Código Procesal Penal en cuanto a la valoración de la prueba y, en concordancia con lo anterior, expone con carencia de lógica las fundamentaciones de la sentencia, en abierta infracción al artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, todo lo cual condujo al Tribunal a dar por establecida la participación de su representado en los dos delitos de robo con intimidación, condenándolo por dichos delitos a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, a las sanciones accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en circunstancias que de haber respetado las normas generales y obligatorias sobre fundamentación de la sentencia y valoración de la prueba, hubiese concluido que no se puede tener por acreditada la autoría de don Claudio Esteban Calderón Silva con las pruebas tenidas a la vista. El perjuicio consiste entonces en que se condena a una sanción de 10 años y un día de presidio mayor en su



grado medio, aun cuando conforme a la prueba vertida en el juicio persista una duda razonable de que su conducta no cumpliera con los requisitos exigidos para atribuir la participación en calidad de autor, ocasionándole así, un agravio que sería reparable únicamente por la vía de nulidad, ya que al no determinarse la participación, se debió absolver y no condenar.

Séptimo: Que, como petición concreta, se solicita que se acoja el recurso de nulidad en virtud de la causal invocada contemplada en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal en relación con el artículo 342 letra c) del mismo Código y proceda a invalidar el juicio oral y la resolución recurrida, en cuanto condena a su representado antes individualizado en calidad de autor por dos delitos de robo con intimidación a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 386 del Código Procesal Penal, determine el estado en que hubiere de quedar el procedimiento, ordenando la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que corresponda, para que este disponga la realización de un nuevo juicio oral.

Octavo: Que, como reiteradamente ha señalado esta Corte, el recurso de nulidad reglado en el estatuto procesal penal ha sido instituido por el legislador para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente ésta, por las causales expresamente señaladas en la ley, esto es, por contravenciones precisas y categóricas cometidas en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento del veredicto, abriendo paso a una decisión de ineficacia de todos aquellos actos que, dada la causal elegida por el recurrente ubicada dentro de las denominadas motivos absolutos de nulidad, importan necesariamente un perjuicio para el interviniente y, sustancial, desde el momento en que constituyen una infracción manifiesta a las garantías, en particular a vicios que impidan a la defensa ejercer sus facultades legales o que afecten a la sentencia por falta de fundamentación en la exposición, la que ha de ser clara, lógica y completa de cada uno de los hechos que se dieron por probados, fueren favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren esas conclusiones y, la resolución de condena o absolución, todo ello de acuerdo a los términos de las causales del artículo 374 letra e) en relación con el artículo 342 letra c) y el artículo 297,



todos del Código Procesal Penal, lo que deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a las que arriba la sentencia.

Noveno: Que, desde la óptica descrita en el motivo precedente y de un atento examen de su recurso, aparece del todo evidente que los cuestionamientos que se realizan en relación al establecimiento de los hechos, la tipificación del delito como a la participación, expresamente se relacionan con la valoración efectuada por el tribunal oral, lo que sumado a afirmaciones personales que entrega el impugnante, lo llevan a concluir automáticamente un parecer diferente y que a su juicio configuraría la motivación de nulidad esgrimida, generalidades que no permiten alterar la realidad fáctica establecida ni menos la convicción a la que arribaron los jueces respecto de los medios que lo hubieran permitido.

Décimo: Que, así, el arbitrio se reduce más bien a dar cuenta de una disconformidad con las motivaciones vertidas en la sentencia para concluir de la manera en que se hizo, por lo que no existe motivo para invalidar la sentencia en examen, por lo que no siendo efectiva la trasgresión denunciada, se impone el rechazo.

Undécimo: Que, en todo caso, examinada igualmente la sentencia cuestionada, es que esas supuestas trasgresiones fueron debidamente respondidas por los jueces del fondo, explicitando los razonamientos por los que consideraron que no se reunían por separado ni en conjunto las alegaciones que planteó en el juicio la defensa penal del acusado de autos y su tesis alternativa, siendo que en el motivo séptimo y siguientes, en donde los jueces se hicieron cargo de la prueba rendida en el juicio oral, en orden a acreditar la responsabilidad del enjuiciado de autos y los ilícitos cometidos.

Duodécimo: Que, como se aprecia, es de toda evidencia, la recurrente -pese la precisión que le imponía el ejercicio de un medio de impugnación extraordinario y de derecho estricto como el elegido- solo cuestiona por razones tangenciales que la sentencia recurrida vulneraría el principio de razón suficiente o de corroboración, afirmando que no era posible adoptar la decisión de condenar, lo que sumado a conclusiones personales que entrega el impugnante respecto de la rendida, de lo que



supone automáticamente un parecer diferente, configuraría a su juicio la motivación de nulidad esgrimida, lo que constituye un error.

Décimo tercero: Que, la sentencia consigna que la discusión a dilucidar fue precisamente lo que echa de menos el defensor, esto es, si se dan en la especie, los requisitos propios del tipo penal aplicado, en particular para establecer la participación, para lo cual tuvo presente que con la declaración de las afectadas, quienes relataron que caminando por calle Lumen con Los Gobernadores, se les acercó un sujeto, las intimidó con un cuchillo y con garabatos les exigió que entregaran sus pertenencias, ambas víctimas forcejean, pero el sujeto logra arrebatárselas su monedero y mochila respectivamente, con diversas especies en su interior.

En ese aspecto, el fallo consigna que en el juicio oral, principalmente con el testimonio de las víctimas, quienes señalaron que en circunstancias que transitaban por calle Lumen con Los Gobernadores fueron abordadas por un sujeto, las intimidó con un cuchillo, le requirió sus pertenencias, forcejearon y finalmente le sustrajo sus bienes, que se materializó mediante la forma en que fueron abordadas con un arma blanca tipo cuchillo, a la vez que se les exigía que entregaran sus especies con garabatos. La coacción a que se vieron sometidas las afectadas, por medio del gesto coercitivo que hace el sujeto al apuntarlas con un arma blanca, revelan actos que infundieron en éstas el temor suficiente como para que el sujeto pudiese apropiarse de sus pertenencias. En el mismo sentido acuden los testimonios de Carabineros.

Décimo cuarto: Que, en cuanto a los elementos subjetivos del tipo penal, por las mismas pruebas referidas en el considerando sexto permitieron estimar que la conducta desplegada por el sujeto activo, el acusado, quien se acerca a las víctimas las intimida con un cuchillo, las increpa y forcejea exigiéndole la entrega de sus especies, para luego huir, revelan conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo. Es decir, se actuó por parte del sujeto activo, con dolo de ejecutar el delito de robo con intimidación.

Analizando la prueba de cargo rendida en la audiencia, se estima, que la declaración de las víctimas es categórica, veraz, concisa y creíble,



impresionando fundamentalmente como absolutamente ciertas, ubicadas espacial y temporalmente, tanto porque no se advierte ninguna contradicción en sus dichos, ninguna laguna en sus recuerdos que haya tratado de superar con alguna apreciación posterior o alguna deducción, y no se advierte ningún interés secundario en manipular los hechos que pudieran llevarlas a aportar antecedentes no veraces e innecesarios, todo lo cual guarda una coherencia con las declaraciones de los funcionarios policiales y testigo presencial, apreciando que, en su totalidad, la prueba rendida por la fiscalía, formó un conjunto de antecedentes bien cohesionados y coherentes entre sí, lo que permitió tener por acreditados los hechos que constituyen el supuesto fáctico de los dos delitos de robo con intimidación.

Décimo quinto: Que, la intervención del acusado se comprobó acertadamente gracias a las declaraciones de las afectadas, testigo presencial y los funcionarios policiales quienes en lo pertinente a su declaración, proporcionan una serie antecedentes que permiten vincular al imputado con los hechos acreditados. Las dos primeras, L.D.C.S.S. y B.J.F.Z., describen una dinámica de acción, en cuanto a la forma de acometimiento y sustracción afín. Pero, además, ambas describen el arma utilizada de forma similar, en sus declaraciones en estrado indican que es un cuchillo grande que ponen en su estómago y cuello respectivamente.

Las víctimas antes mencionadas, señalan que el sujeto que le sustrajo sus pertenencias se movilizaba a pie, las atacó por atrás, las intimidó con un arma blanca, forcejeó con ellas hasta quitarles sus pertenencias, pudiendo observarse que uno acontece a plena luz de día y el segundo de noche en un sector con luz artificial, tanto del alumbrado público como del antejardín del inmueble ubicado en la intersección de calle Lumen con Los Gobernadores, lo que da cuenta que las afectadas pudieron observar el rostro de su agresor mientras forcejeaban cuerpo a cuerpo con éste.

Décimo sexto: Que, ambas dieron cuenta que luego el sujeto huye por calle Los Gobernadores hacia un cerro. Lo que coincide con lo expuesto por los funcionarios de Carabineros, testigo presencial y videos



exhibidos. En estos últimos se puede apreciar claramente el lugar y dinámica de los asaltos.

Es más, las afectadas, describen físicamente al partícipe, distinguiéndolo claramente, siempre señalan que el sujeto era bajo de entre un metro a un metro sesenta de estatura, de contextura gruesa y tenía un lunar en la mejilla, características que presenta el imputado, según lo manifestó el funcionario Avaca, razón por la cual al confeccionar el set fotográfico exhibido a la testigo “B” se incluyó a personas con lunar en su mejilla, siendo reconocido el acusado en esta diligencia.

A mayor abundamiento, las dos testigos reconocen en estrado a Claudio Esteban Calderón Silva, como el sujeto que las intimidó con un arma de blanca y les sustrajo sus especies, dando cuenta que observaron su rostro pues se encontraba a poca distancia, interactuando con este en un forcejeo. La testigo del hecho N°2, si bien señala, que el sujeto sale de unas ligustrinas y la ataca, refiere que observó al individuo, antes de llegar a su domicilio, pues le llamó la atención que estuviese sacando fotos a casas del sector, por lo que el argumento de la defensa, en orden a que fueron solo segundos de observación por parte de las víctimas se diluye, pues de la declaración de B.J.F.Z. en relación al video expuesto, fue posible concluir que esta testigo visualiza al imputado bastante más tiempo, que el segundo y medio a que alude la defensa. Lo que permitió concluir su reconocimiento como certero y cierto.

Décimo séptimo: Que, igualmente, el testigo presencial del hecho N°1, quien reconoce al imputado, tal como se aprecia del video exhibido y de su propia declaración, se encontraba regando el bandejón central y observó al acusado, antes de la comisión del asalto, mientras circulaba por calle Lumen, es decir, más tiempo que el segundo y medio que tan insistentemente destacó la defensa.

Igualmente, las afectadas realizaron en estrados, un reconocimiento absolutamente espontaneo, por un sistema digital y pese a que el imputado no estaba tan cerca de la pantalla, lo que revela el grado de certeza de esta sindicación.

A su tiempo, los funcionarios policiales, ratifican la descripción inicial de las víctimas y en concreto el cabo segundo Avaca da cuenta de la



investigación que llevaron a cabo, logrando establecer que el sujeto que concurría a asaltar en el sector era un tal Caco, que luego logran individualizar como Claudio Esteban Calderón Silva, por testigos que resguardaron su identidad, sin perjuicio de dejarse registro de tales antecedentes en el parte policial, al que tuvo acceso y conocimiento la defensa.

Décimo octavo: Que, como se advierte, el análisis por separado ni en conjunto de las omisiones o contradicciones que dice ver la recurrente permiten configurar el vicio invocado, siendo que en definitiva, solo de la suficiencia de los medios de prueba rendidos, a los que se hizo debida referencia en la sentencia, cuya fuerza incriminatoria fue lo que permitió adquirir más allá de toda duda razonable la convicción de que pudo demostrarse la efectividad de los hechos punibles y de la participación que en ellos le correspondió al acusado, siendo por ello que el arbitrio se reduce más bien a dar cuenta de una disconformidad con las motivaciones vertidas en la sentencia para concluir de la manera en que se hizo, ya que no se presenta una real falta de razonamientos o carencia de los consignados en el fallo, ni una omisión de pronunciamiento de alguna prueba y/o argumentaciones de los recurrentes o infracción de las reglas de la sana crítica. Dicha discrepancia no constituye motivo para invalidar el juicio y la sentencia en examen, por lo que no siendo efectiva la falta denunciada, se impone el rechazo del recurso por su única causal.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372, 374 y 384, todos del Código Procesal Penal, se decide que:

Se **RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por la Defensoría Penal Pública actuando en representación del sentenciado **CLAUDIO ESTEBAN CALDERÓN SILVA**, en contra de la sentencia del Quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, como del juicio oral que le antecedió, correspondientes al proceso RIT N° 45-2021, RUC N° 1900952980-5, los que en consecuencia, **no son nulos**.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz.

Ingreso Corte RPP Rol N° 4325-2021.



Pronunciada por la **Octava Sala**, integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda e integrada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Fiscal Judicial señora Macarena Troncoso López, quien no firma por ausencia, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa.



Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mireya Eugenia Lopez M., Alejandro Rivera M. Santiago, tres de diciembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a tres de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

